

Instituciones/perceptores (1)	Cuantía asignada — Pesetas
COORD. DE ALUM. DEL LAGO DE ZURICH, WADENSWILL .....	82.936
FEDERACION DEL MOV. ASOCIATIVO, GRETZENBACH .....	200.000
GRUPO ARTIST. CULT. NUEVA GENERACION, MONTHY .....	82.936
GRUPO DE DANZA AIRES DE ESPAÑA, LENZBURG .....	82.936
GRUPO DE TEATRO ESPAÑOL, LAUSANNE .....	82.936
GRUPO TEATRAL LOS COMICASTROS, BRUGG .....	82.936
IRMANDADE GALEGA NA SUIZA, GINEBRA .....	82.936
MISION CATOLICA ESPAÑOLA, NYON .....	200.000
ORGANIZ. DE HOMOS. Y LESBIANAS, ZURICH .....	82.936
PROMOCION DA CULTURAL GALEGA, LAUSANNE .....	82.936
SDAD. GALLEGA SEMENTEIRA, BASEL .....	150.000
SDAD. CULT. RECREAT. ESPAÑOLA, GLARUS .....	82.936
SOCIEDAD A NOSA GALICIA, GINEBRA .....	350.000
SOCIEDAD O FEITIZO, BERNA .....	82.936
SOCIEDAD GALEGA VAL DO OURO, KUSNACHT .....	82.936
SOLIDARIDAD SIN FRONTERAS, BERNA .....	82.936
UNION GALLEGA, MONTHY .....	82.936
Total Suiza .....	9.596.800
TOTAL PROGRAMA 15 .....	66.291.800
<b>P. 17. CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE EMIGRANTES MAYORES RETORNADOS:</b>	
FUNDACIÓN GUMIEL «EL RETORNO» .....	19.396.339
TOTAL PROGRAMA 17 .....	19.396.339
<b>P. 19. AYUDAS PARA FACILITAR LA LIBRE CIRCULACIÓN DE JOVENES TRABAJADORES:</b>	
ACADEMIA DIDACTICA CASTELLON .....	6.000.000
F. ICARO .....	5.000.000
HEMEROSCOPEA .....	6.000.000
IFES (ZARAGOZA) .....	14.000.000
J.T.D. JAVEA (ALICANTE) .....	6.000.000
TOTAL PROGRAMA 19 .....	37.000.000

(1) La lista de beneficiarios no es definitiva. Pueden producirse modificaciones bien por renuncia expresa del beneficiario, bien por cualquier otra contingencia relacionada con el mismo que origine la anulación de la ayuda .....

## MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

**20508** *REAL DECRETO 1881/2000, de 10 de noviembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a las personas que se citan.*

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, y en el Real Decreto 1974/1999, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo, a propuesta del Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de la Presidencia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de noviembre de 2000,

### DISPONGO:

En atención a los méritos y circunstancias concurrentes, vengo en concederle la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo, a título póstumo, a las siguientes personas: Don Francisco Álvarez Gómez, doña María Josefa García Sánchez, don Ángel Jesús Mota Iglesias, don José Luis de Raymundo Moya, don Antonio Recio

Claver, don Juan Romero Álvarez, don José San Martín Bretón, don Julio Segarra Blanco, don Alfredo Jorge Suar Muro y don José Valero Sánchez.

Dado en Madrid a 10 de noviembre de 2000.

JUAN CARLOS R.

El Vicepresidente Primero del Gobierno  
y Ministro de la Presidencia,  
MARIANO RAJOY BREY

## MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

**20509** *ORDEN de 26 de octubre de 2000 por la que se dispone la publicación del Acuerdo de aprobación de las normas de funcionamiento de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.*

Adoptado el Acuerdo de aprobación de las normas de funcionamiento de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, el día 20 de septiembre de 2000, procede su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» como Anexo a la presente Orden.

Madrid, 26 de octubre de 2000.

POSADA MORENO

### ANEXO

#### Normas de funcionamiento de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Con el fin de intensificar la cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas, en el marco de los principios que deben regir las relaciones entre Administraciones Públicas, el artículo 5.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, recoge la figura de las Comisiones Bilaterales de Cooperación, señalando que: «Los órganos de cooperación de composición bilateral y de ámbito general que reúnan a miembros del Gobierno, en representación de la Administración General del Estado y a miembros del Consejo de Gobierno, en representación de la respectiva Comunidad Autónoma, se denominan Comisiones Bilaterales de Cooperación. Su creación se efectúa mediante acuerdo, que determina los elementos esenciales de su régimen».

Es clara, por tanto, la voluntad del legislador de dotar de un marco legal y en definitiva de potenciar las funciones de estos órganos que, si bien ya habían sido creados, no disponían de una regulación con rango de Ley.

Por otra parte, el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero, ha dotado a estas Comisiones de una nueva función, al permitir que en el seno de las mismas se puedan adoptar acuerdos de resolución de discrepancias que eviten, en su caso, la interposición del recurso de inconstitucionalidad. Esta modificación, encaminada a propiciar la profundización de las relaciones de cooperación entre la Administración General del Estado y las respectivas Comunidades, al objeto de favorecer los cauces de entendimiento que eviten el planteamiento de recursos de inconstitucionalidad, exige una nueva consideración de las funciones a desarrollar por las Comisiones Bilaterales de Cooperación, a cuyo efecto, se hace preciso aprobar unas nuevas normas internas de funcionamiento que recojan y se adecuen a lo que demanda la citada Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

En su virtud, la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, acuerda aprobar las siguientes normas de funcionamiento:

I. *Del carácter y funciones de la Comisión*

1. La Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, sin perjuicio de las funciones atribuidas a los órganos de cooperación multilateral y a la Comisión Mixta de Transferencias, se concibe como un instrumento esencial de cooperación y entendimiento entre ambas Administraciones.

2. A tales efectos, la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha desempeña las siguientes funciones:

a) Impulsar y concretar, desde el punto de vista bilateral, la realización de planes, programas y actuaciones conjuntas para el desarrollo de las políticas comunes en los distintos ámbitos sectoriales.

b) Impulsar la celebración de convenios de colaboración en aquellos ámbitos materiales en los cuales sea necesaria la especificación de un plan o programa conjunto de forma bilateral.

c) Diseñar mecanismos de colaboración mutua en las distintas áreas que pueda confluír la actividad de ambas Administraciones.

d) Servir de cauce de actuaciones de carácter preventivo en el intento de impedir que surjan conflictos entre ambas Administraciones.

e) Arbitrar propuestas de solución a cuestiones que interesen a ambas Administraciones en asuntos de su competencia.

f) Examinar cualesquiera asuntos que afecten a ambas partes y, en particular, los que tengan por objeto evitar o intentar resolver por vía extraprocesal conflictos de competencia.

g) Analizar las normas con rango de Ley, estatales o autonómicas, en relación con las cuales se susciten cuestiones susceptibles de dar lugar al planteamiento de un recurso de inconstitucionalidad, con el fin de llegar a un acuerdo que evite su interposición, en el marco de lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero.

3. En ningún caso los acuerdos adoptados como consecuencia del ejercicio de las funciones señaladas, podrán suponer la renuncia al ejercicio de las competencias propias de las respectivas partes.

II. *De la composición de la Comisión*

1. La composición de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha será variable en función de los asuntos a tratar.

En todo caso, serán miembros permanentes de la Comisión:

Por parte de la Administración General del Estado:

El Presidente, que será el Ministro de Administraciones Públicas.

El Secretario de Estado de Organización Territorial del Estado.

El Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

El Director General de Política Autonómica del Ministerio de Administraciones Públicas.

Un funcionario o cargo público del Ministerio de Administraciones Públicas que actuará como Secretario.

Por parte de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha:

El Vicepresidente de la Comisión, que es el Vicepresidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

El Consejero de Presidencia.

La Consejera de Administraciones Públicas.

La Consejera de Economía y Hacienda.

El Secretario de la Comisión Mixta de Transferencias, que actuará como Secretario.

Tanto el Presidente como el Vicepresidente podrán delegar su representación en la persona que decidan, con rango, al menos, de Director General o equivalente.

Asimismo, los miembros permanentes se podrán modificar por acuerdo comunicado de cualquiera de las partes.

2. Podrán asistir a las reuniones de la Comisión Bilateral de Cooperación aquellas autoridades y funcionarios de la Administración General del Estado o de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, que sean designadas por cada una de las partes en función de los temas a tratar.

3. Para la válida constitución de la Comisión, y para la adopción de acuerdos, será suficiente con la presencia del Presidente, el Vicepresidente y los dos Secretarios.

III. *Del funcionamiento de la Comisión*

1. La Comisión actuará siempre con la máxima flexibilidad operativa y funcional.

2. Las reuniones de la Comisión podrán celebrarse tanto en la sede del Ministerio de Administraciones Públicas, en la Consejería correspondiente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, o en cualquier otro lugar de mutuo acuerdo entre las partes y, en su caso, con la periodicidad que las mismas estimen conveniente.

3. La convocatoria de la Comisión podrá ser solicitada por cualquiera de las partes.

La convocatoria responderá al Presidente, y será notificada con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, excepto en los casos de urgencia libremente apreciados por el convocante, en cuyo caso se hará con una antelación mínima de veinticuatro horas.

4. El orden del día de las sesiones de la Comisión se elaborará de común acuerdo por ambas partes.

5. La Comisión adoptará sus decisiones de común acuerdo entre ambas partes.

Dichos acuerdos podrán publicarse en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha siendo obligatoria, en cualquier caso, su publicación, en el supuesto previsto en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

6. De cada una de las sesiones de la Comisión se levantará Acta, que recogerá, sucintamente, la relación de los asuntos tratados, las posturas mantenidas por las partes sobre los mismos y los acuerdos, en su caso, adoptados.

Cualquier miembro de la Comisión podrá solicitar que se haga constar en el Acta la posición mantenida en relación con alguna de las cuestiones examinadas. Asimismo, podrá aportar escritos o documentos solicitando expresamente que se unan al Acta.

Las Actas se extenderán por duplicado, de interés de la representación del Estado y de la Comunidad Autónoma.

7. La Secretaría de la Comisión es conjunta y será ejercida por un funcionario o cargo público de la Administración General del Estado y otro de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, designados por el Presidente y Vicepresidente respectivamente.

Corresponden a esta Secretaría conjunta las siguientes funciones:

Preparar las reuniones de la Comisión.

Levantar las actas de las sesiones.

Extender certificaciones de los acuerdos adoptados por la Comisión.

Proceder a la elaboración y distribución de la documentación que sea necesaria o de interés para la realización de los trabajos.

El Secretario designado por el Presidente custodiará la documentación y atenderá el funcionamiento interno de la Comisión.

IV. *Del funcionamiento de la Comisión en el supuesto previsto en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero*

1. Cuando una de las partes considere que existen fundados motivos para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra una norma con rango de Ley, podrá instar la convocatoria de la reunión de la Comisión Bilateral antes de que se cumplan los tres meses desde la publicación de la norma, a efectos de que la Comisión considere la aplicación de lo previsto en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de enero, del Tribunal Constitucional, en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero.

2. A resultados de lo anterior, en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación se podrá adoptar el acuerdo de iniciar negociaciones para resolver las discrepancias, pudiendo instarse, en su caso, la modificación del texto normativo.

Dicho acuerdo, certificado por los Secretarios, será comunicado al Presidente del Tribunal Constitucional por el Ministro de Administraciones Públicas, como Presidente de la Comisión, dentro del plazo de los tres meses siguientes a la publicación de la Ley sometida a conocimiento de la Comisión, a los efectos de ampliación del plazo de interposición del recurso de inconstitucionalidad, en los términos previstos en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

3. Asimismo, la Comisión Bilateral podrá acordar la creación de un Grupo de Trabajo que estudie y analice la problemática planteada, con el fin de buscar la solución que proceda.

## V. De los Grupos de Trabajo

1. La Comisión podrá acordar la creación de Grupos de Trabajo de carácter permanente o coyuntural, para el estudio y análisis de cuestiones concretas.

La composición y régimen de funcionamiento de cada Grupo de Trabajo, así como los cometidos que correspondan a su finalidad, deberán especificarse en el Acuerdo de la Comisión que disponga su constitución.

2. La presidencia de los Grupos de Trabajo podrá ser ostentada indistintamente por un representante de la Administración General del Estado o de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, con rango, al menos, de Director General.

3. Sin perjuicio de lo anterior, existirá un Grupo de Trabajo de carácter permanente a efectos de lo previsto en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Este Grupo podrá optar, por delegación de la Comisión, los acuerdos pertinentes, los cuales serán comunicados al Presidente del Tribunal Constitucional en la forma prevista en el punto IV.2 de estas normas de funcionamiento.

4. La Presidencia de este Grupo de Trabajo corresponderá al Director General de Política Autonómica, siendo Vicepresidente la persona con rango mínimo de Director General designada por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Actuarán como Secretarios los que hubieran sido designados para la Comisión Bilateral, pudiendo asistir, asimismo, los miembros que designen ambas representaciones.

## Disposición final.

El presente Acuerdo será publicado en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

En Toledo a 20 de septiembre de 2000, firman las presentes normas de funcionamiento, el Ministro de Administraciones Públicas y el Vicepresidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

## MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

**20510** *ORDEN de 25 de octubre de 2000 por la que se establecen las bases reguladoras para el período 2000-2003 y la convocatoria del año 2000, relativas a la concesión de anticipos reembolsables a la participación empresarial en programas de desarrollo tecnológico de aviones de transporte regional (PAREGIO).*

El segmento mundial de los aviones de transporte regional esta siendo sometido a una sustancial transformación con motivo de la creciente demanda, tanto de la propulsión por medio de reactores que sustituye a la de turbohélice, como por el aumento de la capacidad de los aviones hacia las 50-100 plazas. En sintonía con esta transformación, tres empresas aeronáuticas internacionales han lanzado hasta ahora sus respectivos programas de desarrollo y fabricación de aviones reactores de la gama de 50-100 plazas para estos servicios regionales. Estos tres programas están promovidos y liderados por las siguientes empresas: La canadiense Bombardier, la alemana Dornier y la brasileña Embraer.

Los programas de las tres empresas citadas, se repartirán probablemente el mercado mundial, ya que las previsiones de la demanda global para el período 2001-2015 ascienden a la entrega de unos 4.000 aviones. Esta demanda estaría suficientemente cubierta con la oferta proveniente de los citados programas.

Los nuevos modelos de aviones incluidos en los programas de cada una de las tres empresas citadas están diseñados como una familia de aviones, en el sentido de que cuentan con elementos y equipos comunes, aspectos estos que, junto con unas exigencias técnicas menores que las de los grandes aviones (los de más de 100 plazas fabricados por Boeing o Airbus), reducen sus costes de desarrollo, de operación y de mantenimiento respecto a los de aquellos, circunstancias estas que diferencian claramente estos nuevos modelos del segmento regional del de los grandes aviones.

A pesar de las características citadas en el párrafo anterior, los programas de desarrollo y de fabricación de estos nuevos modelos hacen necesarias unas capacidades financieras que sobrepasan ampliamente las de las empresas promotoras y líderes de los mismos. Para hacer frente a estas necesidades, se ha utilizado por ellas una fórmula que viene siendo habitual en el sector aeronáutico: La participación conjunta en los desarrollos y en la fabricación de varias empresas.

La aplicación de esta fórmula por las promotoras y líderes de estos programas de aviones regionales, que actúan también como fabricantes e integradoras, ha propiciado la participación de otros socios industriales en el diseño, desarrollo, certificación y producción de elementos, equipos o componentes significativos o principales de dichos aviones, que a su vez comparten, de acuerdo con su participación, los riesgos comerciales. Esta participación reparte las elevadas cargas del desarrollo y de la producción y distribuye la especialización tecnológica y empresarial. Las citadas cargas del desarrollo aún suponen retos y esfuerzos económico-financieros importantes para las empresas partícipes, por lo que generalmente, la parte de las mismas que corresponde a los costes de los programas tecnológicos son apoyados por los Gobiernos.

Al menos dos de estas promotoras líderes de programas regionales han suscrito, o tienen previsto hacerlo, contratos para la participación a riesgo con empresas españolas para el desarrollo y fabricación de diversos elementos, equipos o componentes principales. Las empresas se seleccionan para esta participación por las promotoras sobre la base de su capacidad tecnológica e industrial y a las relaciones previas mantenidas con ellas.

Esta participación empresarial se contempla desde la Administración favorablemente porque, entre otros aspectos, ayuda a su posicionamiento y consolidación como especialistas a escala mundial, entrando a formar parte de núcleos seleccionados de empresas; les proporciona carga de trabajo en este segmento de aviones regionales, que puede mitigar los ciclos sectoriales al no coincidir estos con los de los grandes aviones, así como que dicha participación se extiende a todo el tejido industrial, formado por colaboradores y subcontratistas de dichas empresas, circunstancia que proporcionará estabilidad y potencialidad al conjunto del sector.

Esta apreciación favorable se debe traducir en la concesión de apoyos al desarrollo tecnológico precompetitivo, al igual que lo hacen otros Gobiernos con este segmento y con el de los grandes aviones, ya que existen los mismos motivos expresados para ellos: largo período de maduración, alto riesgo, elevados costes de desarrollo, etc. La instrumentación de estos apoyos, es adecuada que se canalice hacia aquellas empresas que participan en el desarrollo y que asumen los riesgos del mismo, y no a aquellas otras, colaboradoras o subcontratistas, que quedan ajenas a estos compromisos.

Estos apoyos gubernamentales coinciden en sus objetivos, intensidades de ayuda y demás elementos fundamentales con los del Plan Tecnológico Aeronáutico II (PTA II), autorizado por la Comisión Europea en 1999 a tenor de la letra c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE, por lo que se considera que tales apoyos están encuadrados en el PTA II.

Los anticipos reembolsables a que se refiere la presente Orden se registrarán además de lo previsto en ella, por lo establecido en el artículo 81 de la Ley General Presupuestaria; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y por el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento para la Concesión Subvenciones Públicas, y por las demás disposiciones que le sean de aplicación.

Todo ello se dicta en virtud de la competencia estatal en materia de fomento y coordinación de la investigación científica y técnica previstas en el artículo 149.1.15.<sup>a</sup> de la Constitución.

En su virtud, dispongo:

Primero. *Objeto y ámbito temporal.*

1. La presente Orden establece las bases reguladoras para la concesión de anticipos reembolsables que registrarán en el período 2000-2003 a aquellas empresas que teniendo establecimientos industriales en territorio español, participen como socios a riesgo en programas internacionales de desarrollo y fabricación de aviones reactores de transporte regional de 50-100 plazas, así como la convocatoria de dichos anticipos para el ejercicio de 2000.

2. Los programas de desarrollo citados que sean objeto de apoyo deberán ser de carácter tecnológico y precompetitivos y ejecutarse dentro del período antes citado. Esta ejecución plurianual podrá ejercerse en el marco de Convenios de Colaboración que contemplen las actividades de este ejercicio y de ejercicios futuros, siempre que las dotaciones presupuestarias lo permitan. La autorización, en su caso, del Gobierno que permita la celebración de estos Convenios tenderá a que las actividades de los corres-